

El movimiento por la paz en tiempos de guerra

Enric Prat

[*]

El movimiento contra la guerra de Iraq de 2003 ha tenido unos efectos políticos y culturales considerables. Por una parte, es innegable que en la decisión de Rodríguez Zapatero de retirar las tropas españolas de Iraq influyó mucho la impresionante movilización popular en contra de la guerra y de la participación española en la misma decidida por el gobierno de Aznar. Y por otra, se ha ampliado la conciencia crítica de los ciudadanos frente a la guerra, lo cual puede favorecer la realización de nuevas movilizaciones frente a la agravación de los conflictos armados actuales o ante el estallido de nuevas guerras, así como una mayor legitimación de las actividades que desarrollan las organizaciones del movimiento por la paz.

Los grupos pacifistas y antimilitaristas, así como las plataformas contra la guerra, que agruparon a miles de organizaciones y contribuyeron decisivamente a la movilizaron de millones de ciudadanos, tienen tres grandes retos. El primero, seguir realizando acciones de protesta contra la guerra de Iraq y mantener una actividad regular sobre los conflictos armados actuales y los procesos de paz que se van produciendo en diversas regiones y países. Por otra parte, lograr que se produzca una reflexión sobre las ideas pacifistas y antimilitaristas en el amplio movimiento antiguerra que se expresó en las manifestaciones de 2003 y que sectores significativos de este movimiento se vayan implicando en la gran variedad de campañas y actividades que impulsan las entidades pacifistas, con el objetivo de que los ciudadanos no sólo protesten contra la guerra sino que también se opongan a todo lo que contribuye a su preparación y al incremento del militarismo, y que se extienda en la sociedad la cultura de la paz. Y un tercer reto es la articulación de una estrategia de lucha sostenida en el tiempo, en torno a un conjunto de campañas y actividades pacifistas, y un variado repertorio de formas acción, combinando las manifestaciones ciudadanas y la desobediencia civil.

Guerras y conflictos armados

Los colectivos pacifistas y antimilitaristas y las Plataformas contra la guerra han realizado un conjunto de críticas a la doctrina de la «guerra preventiva» y a las intervenciones de los ejércitos de Estados Unidos, Inglaterra, Rusia o la OTAN, así como diversas propuestas alternativas para la resolución de los conflictos bélicos, que son plenamente vigentes y muy necesarias para hacer frente a la guerra actual de Iraq y a los planes agresivos de la Administración Bush contra los países que según su parecer son «bastiones de la tiranía» (Irán, Corea del Norte, Siria, Cuba...).^[1] Han señalado que el objetivo primordial de la mayoría de estas intervenciones no ha sido el que oficialmente se ha invocado,^[2] sino asegurarse el control de las reservas de petróleo, el negocio de la venta de armamentos, la presencia militar en zonas de interés estratégico y el poder político y económico en el mundo; que las intervenciones militares han provocado unas consecuencias negativas (muertos, heridos, refugiados...), no han resuelto los conflictos y han generado más violencia y una mayor extensión mundial del terrorismo; y que algunos de los cuerpos militares que han intervenido en los conflictos bélicos han estado implicados en casos de torturas a los detenidos, agresiones a las

poblaciones autóctonas, violaciones de personas y organización de redes de prostitución.^[3]

El movimiento por la paz ha manifestado que las causas de fondo de la mayoría de los conflictos armados hay que situarlas en los problemas económicos, sociales y políticos que padecen muchos países (pobreza, racismo, machismo, violación de los derechos humanos, ausencia de libertades, precarios sistemas de sanidad y educación...); ha defendido la resolución pacífica y justa de estos conflictos por medios alternativos a los militares, como la prevención, la diplomacia, la suspensión de la venta de armas a los países en conflicto, el diálogo y la negociación; y ha reclamado una mayor presencia de expertos en mediación, organizaciones especializadas en tareas humanitarias y entidades que se dediquen a la cooperación para el desarrollo.

Un tema de reciente preocupación en los grupos pacifistas es el de la creciente privatización de la seguridad. Desde el final de la Guerra Fría se han formado unas noventa empresas, la mayoría de origen británico y estadounidense, denominadas Corporaciones Militares Privadas, que ofrecen servicios militares a ejércitos, gobiernos, cuerpos diplomáticos, multinacionales, empresas petroleras, agencias de Naciones Unidas o ONG. Ofrecen protección, entrenamiento de policías, servicio de vigilancia, desminado de tierras, construcción de campamentos, mantenimiento de sistemas armamentísticos de alta tecnología, patrullas de calle, aviones, helicópteros y soldados dispuestos para el combate. Las CMP se nutren de exmilitares expulsados de sus ejércitos por conductas delictivas, exsoldados de cuerpos especiales (ingleses, serbios, franceses, sudafricanos...) con experiencia en otros conflictos bélicos (Irlanda del Norte, Bosnia, Sudáfrica...) y policías atraídos por los elevados salarios que ofrecen estas empresas (los «soldados privados» que están en Iraq cobran unos 15.000 dólares al mes). Se calcula que las CMP tienen unos 25.000 efectivos en Iraq, lo que supone una proporción de un «soldado privado» por cada diez militares regulares. Estados Unidos es quien más contrata los servicios de las CMP, ya que así evitan un número mayor de militares regulares muertos^[4] y amplían el número de combatientes sin necesidad de que sea autorizado por el Congreso norteamericano.

Las CMP generan diversos problemas: están directamente interesadas en la proliferación de guerras y en que no se resuelvan los conflictos armados (obtienen unos ingresos anuales de unos 100.000 millones de dólares); al ser difíciles de controlar, por su funcionamiento secreto, por la falta de reglas claras y precisas sobre su actuación, y porque los ejércitos y gobiernos que contratan a estas empresas les garantizan inmunidad y no investigan sus actuaciones, se hace muy complicada la exigencia de responsabilidades por sus actividades, que en algunos casos son extremadamente delictivas («soldados privados» participaron en interrogatorios a detenidos iraquíes en la prisión de Abu Ghraib y han dirigido cárceles clandestinas en Afganistán).^[5]

Además de seguir convocando manifestaciones en contra de la guerra,^[6] destacando en cada momento sus peores consecuencias (como la masacre de Faluya de noviembre de 2004 o las torturas a los prisioneros afganos e iraquíes ^[7]), es necesario que se sigan potenciando otras actividades pacifistas ante los conflictos bélicos. Una de las más

destacadas es la que desarrolla la Red de Grupos Mujeres de Negro, criticando las guerras desde el punto de vista de las mujeres; dando a conocer la situación de las mismas en los conflictos bélicos, como víctimas de una violencia específica de género (agresiones sexuales) y como protagonistas de una lucha de resistencia a la guerra y de una labor por la supervivencia de las personas y el cuidado de los enfermos y los heridos; y potenciando el diálogo y la solidaridad entre las mujeres de las diferentes partes enfrentadas en los conflictos armados, con el propósito de que luchen conjuntamente contra la guerra y por una paz justa y sin opresión, a través de la negociación y la mediación.^[8] También hay que valorar el trabajo a favor del diálogo, el acuerdo y la paz en el País Vasco realizado por los grupos Gesto por la Paz (desde su formación en 1986) y Elkarri (desde su nacimiento en 1992). Estas iniciativas a favor del diálogo pueden inspirar otras iniciativas de encuentro: por ejemplo, entre sectores de las poblaciones de los países afectados por la actual ofensiva militar del Imperio (sería muy interesante la relación entre los movimientos por la paz de Occidente y los movimientos sociales del mundo árabe y del Oriente Medio).

Sería deseable que el pacifismo redoblara los esfuerzos en mantener una actividad regular sobre el conjunto de guerras que se producen en el mundo,^[9] investigando e informando de forma veraz sobre los conflictos bélicos que son ignorados por los medios de comunicación (sobre todo los de Africa) o que son valorados de forma sesgada y simplista; y sobre los procesos de paz que se producen en el mundo, tanto los avances que se consiguen como las dificultades, estancamientos y fracasos.^[10] Para la realización de estas tareas, los grupos pacifistas pueden apoyarse en los informes anuales sobre conflictos, derechos humanos y construcción de la paz que elabora la Unidad de Alerta de la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona.^[11] Y, finalmente, convendría informar sobre las actividades de los grupos pacifistas que surgen en los países que están en guerra, así como de la desobediencia de los objetores de conciencia y de los soldados desertores en los diferentes conflictos armados del mundo (Israel, Estados Unidos...), por su coraje y el ejemplo que suponen para todos los defensores de la paz.^[12]

Armamentos

Las minas antipersona aún generan importantes problemas que requieren la atención del movimiento por la paz. Gracias a la campaña internacional contra estas minas se firmó en diciembre de 1997, en Ottawa, el Tratado Internacional que prohíbe su uso, almacenamiento, producción y comercialización, suscrito inicialmente por 122 estados y actualmente por 152. Desde que entró en vigor este Tratado, en marzo de 1999, el comercio de las minas antipersona se ha paralizado, su uso ha descendido considerablemente en el mundo (de los quince países que usaban estas minas antes de 1999 sólo Rusia, Birmania, Georgia y Nepal las emplearon en 2003), se han aumentado las dotaciones económicas para los programas de limpieza de territorios minados y se ha reducido el número de víctimas. Pero las minas siguen produciendo muchas muertes anuales (8.000 reconocidas oficialmente, aunque la cifra real podría situarse entre 15 y 20.000) y 42 países siguen sin firmar el Tratado, entre ellos tres miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas —Estados Unidos, China y Rusia—, tres países de la Unión Europea —Finlandia, Letonia y Polonia—, la mayoría de los países de Oriente Próximo y una buena parte de las antiguas repúblicas soviéticas y de Asia.^[13]

Por otra parte, sigue activa la campaña internacional contra las armas ligeras, impulsada por IANSA (The International Action Network on Small Arms), una red global formada por más de 500 grupos de unos 100 países, que se fundó en 1998. Hay unos 500 millones de armas de este tipo que circulan por el mundo (pistolas, ametralladoras, rifles, lanzagranadas, cañones...), que provocan la muerte de unas 500.000 personas cada año y son la causa del 90% de los muertos en conflictos violentos. Una de las exigencias principales de esta campaña es que Naciones Unidas regule y controle el comercio de las armas ligeras. La campaña «Adiós a las armas» fue iniciada en España en 1999. La promueven unas veinte ONG, entre ellas Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y Médicos Sin Fronteras, y está coordinada por la Cátedra Unesco sobre la Pau i els Drets Humans de la UAB.^[14] Las industrias de armas españolas son también responsables de este problema, ya que han suministrado armas ligeras a bastantes países: Arabia Saudita, Turquía, Filipinas, Indonesia, Pakistán, Corea del Sur, Sri Lanka...^[15]

Además de estas campañas, convendría que el movimiento por la paz dedicara una mayor atención al tipo de armas que Estados Unidos está utilizando en la guerra de Iraq y a los proyectos de nuevas armas de destrucción masiva (nucleares, biológicas y químicas), con el objetivo inicial de informar y alertar a los ciudadanos sobre las consecuencias y los riesgos que comportan. Entre las armas de la última generación, la mayoría de las cuales ya han sido empleadas en Kosovo, Afganistán e Iraq, hay que citar las bombas y misiles de precisión, con sistemas de guiado electro-ópticos e infrarrojos, las bombas de racimo, las bombas electromagnéticas, las bombas termobáricas, la munición de golpe de aire masivo y las armas de uranio empobrecido.^[16] Estados Unidos es el país que dedica más dinero para el desarrollo de nuevos armamentos ofensivos (aviones de combate, buques anfibios, nuevos carros de combate, armas teledirigidas, misiles, proyectiles guiados, sistemas de defensa contra misiles balísticos, aviones espía no tripulados...),^[17] con el propósito de que estos sirvan para hacer efectiva la doctrina de la guerra preventiva. Es en los conflictos bélicos donde comprueban en la práctica la eficacia de las nuevas armas.

Sobre las armas nucleares hay que recordar que en el presupuesto militar para el año 2004 aprobado por Estados Unidos, se incluye una partida de 55 millones de dólares para estudiar la fabricación de minibombas nucleares de cinco kilotonnes de potencia, tres veces menos que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en 1945, que podrían ser utilizadas por el Pentágono en su lucha contra el terrorismo internacional, ya que están concebidas para destruir búnkeres subterráneos en los que se puedan alojar depósitos de armas o los líderes de los grupos terroristas.^[18] La utilización de armas nucleares por parte de Estados Unidos es una posibilidad real desde que la Administración Bush presentó en diciembre de 2001 en el Congreso norteamericano una revisión de su doctrina nuclear (Nuclear Posture Review). También es altamente preocupante que el presidente Vladimir Putin informara en noviembre de 2004 a la cúpula de su Ejército que Rusia estaba investigando con éxito un nuevo tipo de misiles nucleares, que serán puestos en funcionamiento en los próximos años.^[19]

No menos espeluznante es el panorama de la investigación y producción de armas biológicas y químicas. Según un informe publicado por la campaña «Por la paz: no a la investigación militar!», entre los proyectos que se han llevado a cabo en los últimos años en laboratorios militares estadounidenses y que se han desclasificado figuran la investigación de cepas resistentes del virus A de la gripe, la producción por

fermentación de toxina botulínica, la evaluación del potencial de moscas y mosquitos como vectores del ántrax, el estudio de los efectos de gases neurotóxicos en distintas áreas del cerebro y muchos más proyectos relacionados con la guerra química y bacteriológica.^[20]

Gastos militares

El movimiento por la paz ha denunciado el progresivo aumento de los gastos militares en el mundo desde el año 2000, después del descenso que hubo en la década de los años noventa tras el final de la Guerra Fría.^[21] Particularmente significativo ha sido el crecimiento de los gastos militares en Estados Unidos, que ha sido justificado por la necesidad de combatir el terrorismo internacional: desde el año 2001 sus gastos militares han aumentado un 41% y seguirán creciendo en los próximos años. George Bush entregó al Congreso de Estados Unidos, en febrero de 2005, su propuesta de gastos militares para el ejercicio 2006 (que fiscalmente va de octubre de 2005 a octubre de 2006): un total de 419.300 millones de dólares, que supone un incremento del 4,8% respecto al ejercicio anterior y el 16,6% del gasto total de los presupuestos del Estado. Al mismo tiempo, la Administración norteamericana ha anunciado la desaparición o importantes recortes en los programas públicos (becas, planes contra la drogadicción en las escuelas, proyectos de alfabetización, medio ambiente, pagos sanitarios a los más pobres, empleo, vivienda para enfermos de sida...). Por otra parte, han presupuestado 100.000 millones de dólares para operaciones militares en Iraq y Afganistán durante el año 2005 (hasta 2004, los gastos militares de Estados Unidos en Iraq ascendían a unos 200.000 millones de dólares).

También es preocupante el aumento del presupuesto de defensa de China, que en 2004 ascendió a 211.700 millones de yuanes (19.600 millones de euros), un 11% más que el del año 2003, ya que el rearme de su ejército (China está produciendo armas sofisticadas y comprando aviones de combate y submarinos a Rusia) se produce en un contexto de amenazas hacia Taiwán (está previsto que el Parlamento chino apruebe en marzo de 2005 una ley antisecesionista, en la que se establecerá el inicio de una acción militar en el caso de que el presidente taiwanés de pasos hacia la independencia de la isla); de acercamiento militar de Japón a Estados Unidos (el gobierno japonés decidió integrarse en el programa de escudo antimisiles norteamericano, para, según su parecer, protegerse de las amenazas que suponen la política de proliferación nuclear de Corea del Norte y el crecimiento del poder militar de China); de diversas gestiones realizadas por la Administración de Estados Unidos para que Japón, Taiwán y Corea del Sur les compren armamentos (submarinos, destructores, aviones cazasubmarinos, baterías de misiles...) y puedan hacer frente a la amenaza que suponen, según su punto de vista, Irán, Corea del Norte y China; y del despliegue militar de Estados Unidos en diversas partes de Asia (fuerzas navales en el estrecho de Malaca, bombarderos en las bases militares de Filipinas...)^[22]

Todo apunta a que la Unión Europea seguirá este siniestro camino del aumento de los gastos militares,^[23] no sólo por las declaraciones públicas realizadas por diversos de sus dirigentes o por las presiones que en ese sentido han recibido de la Administración Bush, sino porque, como se verá más adelante, la política europea de seguridad y defensa aprobada así lo exige. En el caso de España, el presupuesto militar continúa siendo bastante elevado (para el 2005 asciende a 15.677 millones de euros, es decir, más de 42 millones de euros diarios, que equivale al 1,86% del pib) y todo indica que

seguirá siéndolo en los próximos años, debido a las previsiones de compra de armamentos del gobierno español en el próximo decenio (unos 20.000 millones de euros).

Pero es necesario que esa crítica a los gastos militares se complemente con el impulso de las campañas anuales de objeción fiscal,^[24] en las que se anima a los ciudadanos a que en su declaración del impuesto sobre la renta descuenten el porcentaje equivalente al que en los Presupuestos Generales del Estado se destina a financiar las fuerzas armadas, la investigación de programas militares o la compra de armas, y que hagan una donación del dinero correspondiente a las entidades que desarrollan proyectos de promoción de la cultura de paz, de protección del medio ambiente, de lucha contra la pobreza y otras necesidades sociales. El aumento del número de objetores fiscales que se produjo después de las movilizaciones contra la guerra de Iraq de 2003 es esperanzador (en Cataluña se pasó de 200 objetores fiscales censados en 2002 a 1.500 en 2003), pero al ser una opción exigente se requiere un esfuerzo sostenido por parte de las organizaciones pacifistas y antimilitaristas.

Investigación militar

La Fundació per la Pau promueve desde 1999 la campaña «Por la paz: no a la investigación militar!»^[25] (en junio de 2002 se constituyó la Plataforma Estatal de la campaña), que cuenta con la colaboración técnica de la Cátedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans de la Universitat Autònoma de Barcelona, el apoyo de Justicia y Paz, Asociación para las Naciones Unidas en España, Centre UNESCO de Catalunya y las Federaciones catalanas de ONG por la Paz y por los Derechos Humanos, y la participación de unas cuarenta entidades.^[26] Sus objetivos principales son promover el debate en la sociedad y en la comunidad científica sobre la investigación con fines bélicos, y presionar a los poderes públicos para que transfieran recursos de la investigación militar a la civil, a través de las diversas actividades de la campaña y de la objeción científica.

La campaña afirma que la investigación militar también es responsable de las guerras porque está directamente orientada a desarrollar nuevos sistemas de armas,^[27] alerta sobre los recursos que se destinan en el mundo a este tipo de investigación,^[28] denuncia la militarización de la investigación científica en España,^[29] reclama la transferencia de los recursos que se destinan a la investigación militar hacia la investigación con fines civiles; pide a los científicos, a las universidades y a los centros de investigación que expresen su negativa a colaborar en programas de investigación militar, firmando declaraciones de objeción científica e incluyendo cláusulas de buen uso en sus trabajos científicos (tesis, tesinas, patentes, proyectos...), para impedir su uso militar,^[30] y propone una ley de objeción científica, que ampare a los investigadores que se nieguen a participar en programas militares.

La campaña cuenta con un boletín electrónico que se envía a las personas que han firmado la declaración de objeción científica, cuyo primer número apareció en septiembre de 2002, ha publicado diversos materiales (tríptico, anuario, artículos en diarios y revistas...), ha participado en programas de radio y televisión, ha realizado charlas en las universidades, ha enviado información a los partidos políticos y los grupos parlamentarios y ha protagonizado algunas acciones como el lanzamiento de

aviones de papel con la explicación de la campaña desde las ventanas de algunas universidades o interpelaciones al ministro de Ciencia y Tecnología en actos públicos.

Hasta ahora los resultados de la campaña son considerables: entre abril de 2002 y febrero de 2004, 2.050 científicos, pertenecientes a 38 universidades, 18 centros e institutos de investigación y tres departamentos de investigación y desarrollo de empresas privadas, habían firmado un compromiso de no participar en investigaciones que tengan finalidades militares o estén subvencionadas con fondos dedicados a la investigación con objetivos militares;^[31] durante el año 2003, doce universidades españolas incluyeron en sus estatutos cláusulas de objeción científica, en las que renuncian a la investigación científica orientada hacia finalidades armamentísticas y militares,^[32] y los claustros de otras han aprobado mociones en el mismo sentido;^[33] en el año 2004, por primera vez, una tesis doctoral presentada en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla incorporó una cláusula para impedir su utilización con fines militares;^[34] 1.210 investigadores y 151 ONG pidieron la desmilitarización de la investigación en los presupuestos para 2005.^[35]

Industrias de armamentos

Tras los atentados de Al Qaeda del 11 septiembre de 2001 se han aumentado los gastos militares en el mundo y se han aprobado proyectos de modernización de los ejércitos, lo que ha generado el desarrollo de las industrias de armamentos. Por otra parte, en diversas zonas del mundo se están construyendo nuevas industrias militares. Todo ello, exige una respuesta por parte del movimiento por la paz.

En ese sentido, una buena línea de actuación es la que se ha iniciado desde Justicia i Pau. Cuando la Comissió d'Indústria, Energia, Corriere i Turisme del Parlament, con los votos a favor del PSC, CiU y PP, la abstención de ERC y el rechazo de ICV-EUiA, presentó en 2004 la candidatura de Cataluña para que el consorcio europeo EADS (European Aerospace Defense Space Systems) instale una factoría de su filial Eurocopter para la fabricación de los helicópteros de combate Tigre, Justicia i Pau de Barcelona envió una carta al president de la Generalitat Pasqual Maragall pidiendo la retirada de esta propuesta. En la carta se afirma que los conflictos militares y las guerras se producen, entre otros motivos, por el grado de militarismo existente, es decir, por el exceso de fuerzas armadas y armas, y que la mejor manera de contribuir a una cultura de paz es trabajar por el desarme y la desmilitarización; también se recuerda que el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad en la legislatura anterior la Llei de Foment de la Pau y que ahora es el momento de demostrar que aquella iniciativa no era un papel sin valor.^[36]

Por otra parte, el Centre d'Estudis per la Pau, J.M. Delás, ha denunciado la creación de un fuerte polo de desarrollo de la industria aeronáutica en Catalunya,^[37] impulsado por diversas administraciones (Generalitat, ayuntamientos de Barcelona, Sabadell y Viladecans) y por la asociación baie (Barcelona Aeronáutica i de l'Espai), que agrupa a 55 empresas catalanas de este sector y en la que participa la Generalitat, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad Politécnica de Catalunya. Bastantes de las empresas vinculadas a baie fabrican productos del sector militar (componentes de misiles, cápsulas de proyectiles, diversas piezas para aviones de combate...) y cuenta con ayudas fiscales y en infraestructuras de diversas administraciones.^[38] Además, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, anunció en septiembre de 2004 la

creación de un Centro Tecnológico de Aeronáutica y el Espacio en Viladecans, en el que participan empresas del sector aeronáutico, las universidades catalanas, la Caixa y la Generalitat, y una feria aeroespacial.^[39] Estas denuncias del Centre Delàs pueden ser el inicio de una campaña de presión en contra del desarrollo de la industria aeronáutica y por la conversión de la producción militar a civil, en la que participen asociaciones pacifistas, grupos municipales de los ayuntamientos afectados, organizaciones políticas y sociales.

Algunas ong y centros de investigación para la paz han realizado estudios sobre el accionariado de las industrias militares en España, con el objetivo inicial de averiguar qué empresas y entidades financieras controlan estas industrias, para posteriormente informar a la opinión pública y presionar para que estas empresas dejen de apoyar la industria de armas. Es bastante probable que una posible campaña de denuncia de las vinculaciones del sector financiero con la industria militar pueda interesar a diversos sindicatos, colectivos pacifistas, personas que impulsan la banca ética, y activistas del movimiento altermundista.

También es necesaria una reflexión sobre los resultados de las actividades a favor de la conversión de las fábricas de armamentos en producción civil de utilidad social que se realizaron en el País Vasco en la década de los años noventa. El colectivo Gasteizkoak realizó diversas propuestas de conversión de las industrias de armas, entre ellas la de Explosivos Alaveses (expal), que generaron un importante debate entre los sindicalistas de estas fábricas, los grupos pacifistas y otros colectivos sociales, que condujo a la constitución, en Alava, de la Plataforma Moldaketa, integrada por un conjunto de colectivos juveniles, antimilitaristas, ong, grupos cristianos y organizaciones internacionalistas, que planteó la conversión de la industria militar vasca.

La reflexión sobre la propuesta de conversión de expal es particularmente interesante. En 1997, la Campanya contra el comeré d'armes (c3a) de Barcelona propuso la realización de un estudio de conversión de esa fábrica. El Comité de Empresa de expal, dominado entonces por cc oo y ugt, se opuso a la propuesta, ante el riesgo de la posible pérdida de puestos de trabajo, dando prioridad a esta cuestión frente al problema moral que significa la producción de artefactos que sirven para matar. En abril de 2004 se anunció que la dirección de Unión Española de Explosivos (un holding de empresas del que forman parte Explosivos Alaveses, Explosivos de Burgos, Fabricaciones Extremeñas y Bresel SA, que ocupa el primer lugar como fabricante de explosivos de España y el cuarto en el mundo) iba a cerrar EXPAL, a causa de un descenso de la producción (estaba al 20% de su capacidad) por falta de pedidos.^[40]

Desde luego, el cierre de una fábrica de armamentos es una buena noticia para la causa de la paz y el desarme, pero no lo es que los trabajadores pierdan el puesto de trabajo. Por tanto, a la vista de los resultados, parece bastante claro que hubiera sido mucho mejor luchar por la conversión de EXPAL hacia producción civil que asistir ahora al cierre de la empresa y tener que movilizarse para que se garantice a los trabajadores otras alternativas de empleo. En cualquier caso, los grupos pacifistas, los sindicatos y otros movimientos sociales deberían debatir entre sí estas cuestiones y elaborar propuestas de conversión de las industrias de armas que garanticen los puestos de trabajo.^[41]

Comercio de armas

El aumento de los gastos militares está comportando un desarrollo del comercio de armas internacional. Las industrias de armamentos están desplegando una gran ofensiva comercial para vender sus productos.^[42] Y los principales países productores de armas (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia...) siguen vendiéndolas a gobiernos de países en conflicto o que padecen situaciones de extrema pobreza. Por esas razones, las campañas contra este mercado de la muerte realizadas por diversas ONG y grupos pacifistas son más necesarias que nunca.

Desde su fundación en 1987, ENAAT (European Network Against Arms Trade), una red europea de grupos con presencia en casi todos los países europeos,^[43] ha realizado diversas acciones coordinadas en contra del comercio de armas. Por otra parte, hay que mencionar la campaña «Hay secretos que matan», a favor de la transparencia y el control de la exportación de armas, iniciada en 1994 por Amnistía Internacional, Greenpeace, Médicos sin fronteras e Intermón Oxfam, que contó con el apoyo de más de mil entidades y asociaciones, nueve parlamentos autonómicos y unos doscientos ayuntamientos, en la que se reclamó que los gobiernos informaran a los parlamentos y a la sociedad sobre sus exportaciones de armas y se reivindicó la adopción de códigos de conducta en el comercio de armas, en los que se exigiera a los gobiernos destinatarios de las armas el respeto a los derechos humanos, que no existan en el país conflictos bélicos internos y que no estén implicados en agresiones armadas contra otros países o pueblos.

Actualmente se desarrolla la campaña internacional «Armas bajo control», impulsada por la red de grupos iansa, que reivindica un Tratado internacional que regule el comercio de armas de obligado cumplimiento. Intermón Oxfam y Amnistía Internacional, que son los promotores de esta campaña en España, han pedido al gobierno una ley sobre el comercio de armas.^[44]

Se han aprobado algunos Códigos de Conducta sobre control y transparencia en las exportaciones de armas convencionales (Estados Unidos en 1997, la Unión Europea en 1998), pero el gobierno español incumple sistemáticamente el Código de Conducta europeo, ya que ha vendido armas a países en conflicto (Pakistán y la India, Israel, Colombia, Sudán, Costa de Marfil...) o que han violado los derechos humanos (Turquía). Durante 2003, un 40% por ciento de los países que recibieron armas españolas estaban inmersos en un conflicto armado o en una situación de grave tensión social.^[45]

Bases militares y barcos nucleares

Las bases militares y la presencia de barcos de la otan y de la Sexta Flota norteamericana en los puertos del Mediterráneo han seguido siendo motivos de protesta pacifista: el ecopacifismo andaluz ha ido convocando periódicamente las Marchas a la base aeronaval de Rota; el movimiento por la paz ha denunciado la utilización de las bases militares por parte de Estados Unidos para agredir a otros países (Iraq); los ciudadanos del Campo de Gibraltar se movilizaron durante los años 2000 y 2001 en protesta por la presencia del submarino atómico británico Tireless, que entró en la base de Gibraltar con el reactor averiado; y desde 1998, la coordinadora Tarragona Patrimoni de Pau viene protagonizando diversas acciones en contra de la presencia de barcos

militares de la Alianza Atlántica y de la Sexta Flota, con el propósito de que el puerto de Tarragona deje de ser base logística de estos barcos y no recalen en sus costas buques de guerra, algunos de los cuales son de propulsión nuclear y quizás portadores de armas nucleares.

Política de defensa de la unión europea

Justícia i Pau ha impulsado la campaña «Globalicemos la paz. Por una defensa europea no armada»,^[46] en la que se defiende una Europa desmilitarizada, sin bloques militares, sin producción ni comercio de armas, frente a la concepción militarista de la seguridad que impera entre los dirigentes de la Unión Europea, que en los últimos años han dado pasos decisivos para contar con una fuerza militar relevante, aunque coordinada con la OTAN y en estrecha alianza con los Estados Unidos. Las iniciativas más importantes de la Unión Europea han sido la creación de EADS, un consorcio europeo de aeronáutica y defensa formado por las industrias armamentistas de Alemania, Francia, Italia y España, y la Agencia Europea de Armamentos, encargada de coordinar la compra, producción y exportación de armas; el desarrollo de programas de fabricación conjunta de armamentos, como el avión de combate europeo Eurofighter o el helicóptero Tigre; y la decisión de crear fuerzas de intervención rápida.

Efectivamente, la Unión Europea aprobó, en noviembre de 2004, dotarse de trece unidades militares de intervención rápida, compuestas por unos 1.500 efectivos militares cada una de ellas, con capacidad para intervenir en cualquier parte del mundo en un plazo no superior a 15 días una vez adoptada la decisión política de actuar,^[47] en las misiones previstas por la Política Europea de Seguridad y Defensa incluida en la Constitución Europea: mantenimiento de la paz, prevención de conflictos y reforzamiento de la seguridad internacional. La Unión Europea contempla la posibilidad de que en estas misiones las tropas entren en combate. La ministra francesa de Defensa, Michéle Alliot-Marie, señaló algunas posibles intervenciones futuras de estas unidades de intervención rápida: la zona de los Grandes Lagos africanos, Sudán, Congo, Nigeria, el sur de Argelia, Oriente Próximo, el Cuerno de África y todo Asia Central. La primera misión militar de la Unión Europea ha sido en la ex república yugoslava de Macedonia; por otra parte, las tropas francesas se desplegaron en 2003 en la República Democrática del Congo bajo el paraguas de la UE; el Eurocuerpo aporta el cuartel general de la Fuerza de Asistencia para la Seguridad (ISAF) en Afganistán, bajo mando de la OTAN; y la UE desplegó, en diciembre de 2004, 7.000 militares en Bosnia-Herzegovina, relevando a la Fuerza de Estabilización (Sfor) dirigida por la OTAN.^[48]

La Constitución de la UE que se ha sometido a referéndum en España, en febrero de 2005, recoge todos los elementos anteriormente citados: contempla un incremento de las capacidades militares de los países miembros y la realización de intervenciones militares en diversas regiones del mundo; incluye un artículo de defensa mutua en caso de ataque a uno de los países miembros; se mantiene el vínculo de la UE con la OTAN; y apuesta por el crecimiento de la industria europea de armamentos.

Los partidarios del voto afirmativo en el referéndum de la Constitución europea han afirmado que la política de defensa de la UE es necesaria para contrapesar la política exterior unilateral y belicosa de Estados Unidos, avanzar hacia un mundo militarmente multipolar y reforzar una identidad política propia y autónoma. Pero las relaciones que mantienen la UE y Estados Unidos distan mucho de esas apreciaciones. La oposición de

Francia y la RFA a la invasión de Iraq se está diluyendo y está dando paso a un acercamiento de posturas con Estados Unidos. Por otra parte, la Administración Bush quiere reducir su presencia militar en Iraq, para lo cual necesita que otros países de la OTAN se impliquen en la tarea de formar un ejército y una policía iraquí eficaz. Ese ha sido el propósito de las visitas a algunos países europeos (febrero 2005) del presidente Bush y de la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, y lo que explica su tono conciliador y sus declaraciones a favor de que se estrechen las relaciones trasatlánticas. Parece ser que están consiguiendo este objetivo, ya que unos cuantos países europeos se han comprometido a una mayor colaboración militar en Afganistán e Iraq. Por ejemplo, España formará a iraquíes en labores de desminado y reforzará su presencia militar en Afganistán.

La voluntad real de la UE es complementar su política de defensa con la de Estados Unidos, repartiéndose entre ellos las tareas militares que hay que realizar en el mundo para garantizar sus intereses y valores comunes, así como el dominio de Occidente en el conjunto del planeta. Esa es la función primordial de las fuerzas de intervención rápida. Además, las decisiones militares de la UE siguen quedando subordinadas a las que pueda adoptar la OTAN, a quién se reconoce la primacía en la defensa de Europa, y Estados Unidos, que es quién tiene la hegemonía en esa alianza militar.

Lo que sí existe es una competencia industrial y tecnológica entre la UE y Estados Unidos, como se puso de manifiesto, en octubre de 2004, en la polémica sobre las subvenciones públicas recibidas por los constructores del Airbus A380, el avión de pasajeros de mayor tamaño de la historia, por delante de su rival estadounidense el «jumbo» de Boeing (tanto unos como otros han recibido ayudas públicas a través de los proyectos militares). Eso explica la potenciación de la industria de armamentos por parte de la Unión Europea y su propósito de levantar el embargo a China para venderle armas, a pesar de que ello disguste a la Administración Bush. Esta competencia también incluye inversiones europeas en Estados Unidos para captar una parte de su presupuesto militar. Por ejemplo, en octubre de 2004 eads compró la empresa estadounidense Racal Instruments, especializada en el desarrollo de sistemas electrónicos de defensa; y la británica bae Systems adquirió Digital Net Holdings, una empresa especializada en servicios de red y soluciones informáticas a las agencias de inteligencia gubernamentales.^[49]

Por todo ello, después del referéndum de la Constitución europea las organizaciones del movimiento por la paz deberían seguir realizando campañas en las que critiquen la política de defensa actual de la UE y propongan alternativas de seguridad basadas en el desarme, la diplomacia preventiva, el diálogo y la cooperación al desarrollo.

Ejércitos

En la medida en que los ejércitos siguen siendo muy numerosos^[50] y teniendo un papel primordial en la preparación de las guerras, es necesario que los pacifistas y antimilitaristas continúen la lucha de los objetores de conciencia y los insumisos por la abolición de los ejércitos. Después de la campaña insumisión (1989-2002), que junto a otros factores (una opinión pública que rechazaba mayoritariamente la mili y la tendencia a la profesionalización de los ejércitos de la otan tras el final de la Guerra Fría) condujo a la supresión del servicio militar obligatorio, se deben potenciar otras vías de oposición a las Fuerzas Armadas.

Se deben seguir intensificando las críticas al Ejército, en la medida en que es una institución para la guerra, que tiene entre sus objetivos disciplinar a los jóvenes, dentro de la cual se maltrata física y psíquicamente a bastantes soldados y se producen agresiones sexuales a las mujeres alistadas, para que se profundice la falta de credibilidad social que tienen en la actualidad las Fuerzas Armadas y las dificultades para conseguir un número suficiente de voluntarios.

Se está reduciendo el número de efectivos del ejército profesional: en 1998, cuando se hizo el dictamen para la profesionalización de las Fuerzas Armadas, el gobierno del Partido Popular preveía un modelo de ejército profesional con 102.000-120.000 soldados y marineros; en los presupuestos generales para 2003 esta cifra se redujo a 86.000 soldados, pero ese año acabó sólo con 70.666 soldados en activo, lo que supuso unos 8.000 soldados profesionales menos que cuando se suprimió el servicio militar obligatorio. En los últimos años el descenso de soldados es continuo (a finales de 2001 eran 76.126 y a finales de 2002 eran 72.005) a pesar de que supone un lugar de trabajo remunerado y de las medidas adoptadas por el Ministerio de Defensa (dejó de exigir el graduado escolar, rebajó el coeficiente intelectual mínimo para los aspirantes a soldado, aceptó a inmigrantes sin la nacionalidad española,^[51] aumentó la paga, estableció una equivalencia entre el título de técnico en defensa con las titulaciones de la formación profesional para facilitar la futura inserción de los soldados en la vida civil después de su servicio militar profesional...).[52]

Pero como el gobierno no se resigna a esta situación ha aprobado nuevas medidas, como el incremento del número de extranjeros en las Fuerzas Armadas españolas^[53] o la instauración de tres pagas extraordinarias a los soldados y marineros de las unidades con más carencia de personal,^[54] y tiene otras en proyecto, como la oferta a los soldados de un contrato de veinte años de duración, al término del cual, con una edad de 40 a 45 años, pasarían a la reserva y tendrían derecho a cobrar media pensión hasta su jubilación.^[55] Por lo tanto, uno de los retos del antimilitarismo es la promoción de actividades dirigidas a los jóvenes, para que no ingresen voluntariamente en el ejército.

En ese sentido, son de una gran importancia dos campañas iniciadas en 1998 por la Fundació per la Pau. Durante la campaña «La paz no pasa por los ejércitos», que tenía como objetivo la desmitificación de la idea de que los ejércitos garantizan la paz, se hicieron diversos artículos y charlas. A través de la campaña «Hagamos objeción, eduquemos por la paz», también conocida como campaña «Escuelas por la paz, escuelas objetoras», los centros de enseñanza (de secundaria y de primaria) se pueden declarar objetores de conciencia, comprometiéndose a educar por la paz y los derechos humanos y negándose a colaborar en las campañas del Ministerio de Defensa para fomentar el espíritu militarista en las escuelas y reclutar voluntarios para ser soldados del Ejército, no organizando charlas ni distribuyendo sus materiales de propaganda.^[56]

La campaña «Escuelas objetoras» se inició en la época en la que gobernaba el Partido Popular, cuando aprobó una Directiva de Defensa Nacional en la que se apuntaba la necesidad de incrementar «cultura de la defensa» en el ámbito educativo y asociativo, a través de un incremento de las visitas de militares a los centros de enseñanza y de las visitas de alumnos a los centros militares, la posible edición de libros de texto sobre la cuestión militar, la oferta de una asignatura dedicada a la defensa y al ejército y de cursos de formación para maestros para iniciarlos en las enseñanzas militares. Desgraciadamente, en la Directiva de Defensa Nacional aprobada en diciembre de 2004

por el gobierno del PSOE se mantiene el objetivo de «elevar el nivel de cultura sobre seguridad y defensa en la sociedad española», para lo cual el gobierno «impulsará la difusión del papel y de la necesidad de la defensa, con el fin de favorecer una mayor implicación de la sociedad».

También sería esencial que los grupos pacifistas retomaran las críticas que hicieron los grupos feministas antimilitaristas a la incorporación de las mujeres en las Fuerzas Armadas ^[57] y la tarea que desarrollaron en los años noventa asociaciones como la IDS (Informació per a la Defensa dels Soldats), asesorando y ayudando a los soldados profesionales que padecen maltratos, agresiones, violaciones, vejaciones, sanciones injustas o abusos de poder, ^[58] para que denuncien jurídicamente a los militares maltratadores. Y que se sigan realizando manifestaciones en protesta por la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, como las de mayo de 2000, convocadas por la Plataforma contra la desfilada militar de Barcelona, en las que participaron decenas de miles de ciudadanos.

Acción colectiva y responsabilidad personal

El movimiento por la paz no debería limitarse a responder a las guerras que se van sucediendo o a las amenazas de guerra de cada momento concreto, sino que también debería desarrollar una estrategia sostenida de lucha en torno a la oposición a todo lo que favorece su preparación (armas, economía de la defensa...) y el fomento de la educación para la paz. Esa combinación de acción contra la guerra y su preparación y actividades para la extensión de una cultura de la paz, puede fortalecer al movimiento antiguerra y a los grupos pacifistas en la larga de lucha a favor de la paz y la abolición de las armas, los ejércitos y las guerras.

La acción colectiva del movimiento por la paz debería basarse en un amplio y variado repertorio de formas de acción, combinando las manifestaciones ciudadanas, la desobediencia civil y la educación para la paz. Pero para evitar las guerras no sólo es necesaria la acción colectiva a favor de la paz, el desarme y la justicia social, sino que también se requiere un compromiso de las personas con conciencia pacifista. Por ello, convendría que los grupos pacifistas y antimilitaristas pusieran un mayor énfasis en la responsabilidad personal que tienen los ciudadanos en la preparación de la guerra, en la medida en que se desentienden de problemas como los siguientes: una parte de las aportaciones que se hacen a través del impuesto sobre la renta se destina a gastos militares; se compran acciones, se realizan planes de pensiones o se depositan ahorros en empresas vinculadas a la industria de armas; se vota a partidos políticos que apoyan intervenciones militares contra otros países, aprueban gastos militares o potencian el comercio de armas. Y, en consecuencia, las organizaciones del movimiento por la paz deberían hacer un llamamiento a la población para que no colabore en la preparación de las guerras, ofreciéndole diversas propuestas de actuación: no votar a los partidos políticos que sostienen el militarismo; objeción fiscal; objeción científica; objeción laboral, que consiste en negarse a realizar trabajos que tengan finalidades bélicas; objeción financiera, que opta por no invertir ni depositar ahorros en empresas vinculadas a la industria y el comercio de armas, potenciando alternativas como los bancos y los fondos éticos; apoyar, colaborar y participar en las actividades y los colectivos pacifistas y antimilitaristas.

Sabadell, febrero de 2005

[*] Este texto es una versión corregida y actualizada de la conferencia pronunciada el 16 de diciembre de 2004 en el seminario «Els moviments socials avui», organizado por la Cátedra UNESCO d'Estudis Interculturals de la Universitat Pompeu Fabra.

[1] La Administración Bush no descarta el empleo de la fuerza militar si Corea del Norte no elimina su programa de fabricación de armas nucleares y en el caso de que Irán produzca armas de destrucción masiva o apoye a grupos terroristas.

[2] Por ejemplo, la Administración Bush proclamó que la guerra de Iraq era necesaria por el peligro que representaban las armas de destrucción masiva en poder del régimen de Sadam Husein. Pero estos arsenales nunca han aparecido y el propio Gobierno de Estados Unidos ha tenido que desmantelar, en enero de 2005, las unidades de inspectores encargadas de buscar estas armas. Ahora, la Administración Bush pretende justificar la guerra y la invasión de Iraq como medio para la democratización de ese país, pero lo que en realidad persigue es el establecimiento de un régimen que respete los intereses estratégicos de Estados Unidos en Oriente Próximo, especialmente el control de las reservas de petróleo.

[3] Según un informe de Amnistía Internacional, bastantes soldados norteamericanos, franceses, alemanes e italianos estacionados en Kosovo (la OTAN mantiene en este territorio unos 23.000 soldados) están directamente implicados en operaciones de compra-venta de mujeres de los países balcánicos, que son convertidas en esclavas sexuales. El País, 9 julio 2004.

[4] Por ejemplo, en Iraq murieron unos 50 «soldados privados» y unos 300 resultaron heridos, entre agosto de 2003 y diciembre de 2004.

[5] Sander Ammann, «La privatización de la seguridad», Materiales Trabajo, núm. 24, abril 2004. Ángeles Espinosa, «Soldados privados», El País Semanal, núm. 1.472, 12 diciembre 2004.

[6] Es muy conveniente que siga existiendo una coordinación mundial de las acciones, porque la coincidencia de movilizaciones en un mismo día favorece una mayor participación ciudadana. En ese sentido, es una buena noticia la convocatoria de una jornada internacional de manifestaciones contra la guerra para el día 19 de marzo de 2005, aprobada en la reunión de los movimientos contra la guerra del Foro Social Mundial de Porto Alegre.

[7] Los casos documentados de asesinatos y torturas a detenidos afganos e iraquíes, por parte de militares de los ejércitos de Estados Unidos y Gran Bretaña se multiplican. Los medios de comunicación han publicado fotos de torturas, malos tratos y vejaciones a prisioneros iraquíes infligidos por militares norteamericanos (en la prisión de Abu Ghraib) y británicos (en mayo de 2003 en Basora). También existen evidencias irrefutables de torturas y abusos a los afganos detenidos en la prisión de Guantánamo desde el año 2002. Recientemente, cinco militares de Dinamarca destinados en Iraq han sido acusados de maltratar a prisioneros en una base militar cerca de Basora entre marzo y junio de 2004. La mayoría de soldados juzgados por torturas han manifestado que cumplían órdenes de sus superiores.

[8] Por ejemplo, Donesx Dones, uno de los grupos que forma parte de la Red Internacional de Mujeres de Negro y de la Red de Grupos Mujeres de Negro en España, se ha ocupado de las relaciones entre grupos de mujeres de los Balcanes, de Israel y Palestina, de Estados Unidos y Afganistán, de Chechenia y Rusia, de Marruecos y El Sahara, de Argelia y de Colombia.

[9] Según el informe «Alerta 2004!», elaborado por la Unidad de Alerta de la Escola de Cultura de Pau de la UAB, a finales de 2003 existían 23 conflictos armados, casi la mitad de ellos en África. Algunos de los conflictos armados que seguían activos a finales de 2004 eran los de Chechenia (Rusia inició esta guerra en 1994), República Democrática del Congo (desde 1998), Costa de Marfil (2002), región de Darfur en Sudán (2003).

[10] A finales de 2004 había un mínimo de 18 procesos de paz en el mundo (Vicenc Fisas, «Rescatar la paz desde las cenizas», El País, 28 diciembre 2004). Los más significativos de los últimos años son

los de Irlanda del Norte (iniciado en 1998 con el denominado Acuerdo de Viernes Santo), Sierra Leona (2002), Uganda (después de casi dos décadas de guerra el gobierno ha iniciado una negociación con el Ejército de Resistencia del Señor), Sudán (el gobierno y los rebeldes del sur firmaron un acuerdo de paz en enero de 2005 después de veinte años de guerra y tres de negociaciones). Especialmente importante es el actual diálogo entre los gobiernos de Israel y Palestina, por la trascendencia que tendría una solución pacífica y justa de este conflicto en la evolución de la situación internacional.

[11] www.pangea.org/unescopau.

[12] Parece ser que entre las tropas de Estados Unidos en Iraq ya hay unas decenas de soldados que han intentado declararse objetores de conciencia. Además, se calcula que han desertado unos 5.000 soldados del ejército norteamericano desde que se inició la invasión de Iraq. Illacrua, núm. 126, enero 2005.

[13] El País, 18 noviembre 2004.

[14] Otras de las entidades que promueven esta campaña son: Fundació per la Pau, Centro de Investigación para la Paz (CIP), Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Creu Roja, Educació Sense Fronteres, ACNUR, Federació Catalana d'ONG per la Pau, Instituto para la paz y los conflictos de la Universidad de Granada, Justicia i Pau, Mans Unides, Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza, Unesco Etxea y Unicef.

[15] Informaciones y materiales de la campaña en www.iansa.org y www.pangea.org/unescopau.

[16] Sobre las características y los terribles efectos de este tipo de armas pueden consultarse los artículos de Tomás Gisbert, «Afganistán, Iraq, bombardeados con uranio», Materiales de Trabajo, núm. 21, noviembre 2002; y «Nuevas armas en la guerra de Iraq», Materiales de Trabajo, núm. 22, junio 2003.

[17] En el 2003 destinó unos 50.000 millones de dólares a investigación militar, lo que supone las dos terceras partes del total mundial.

[18] Materiales de Trabajo, núm. 23, diciembre 2003.

[19] El País, 18 noviembre 2004.

[20] «Investigación militar y guerra de Iraq», en: www.prouinvestigacionmilitar.org.

[21] Según el Banco Mundial, en el año 2002 los estados del mundo se gastaron 800.000 millones de dólares en compras de armas. A principios de 2005 el gasto militar mundial anual ya se eleva al billón de euros.

[22] El País, 15 diciembre 2004, 28 diciembre 2004 y 17 febrero 2005. Materiales de Trabajo, núm. 24, abril 2004.

[23] El presupuesto militar del conjunto de los países miembros de la Unión Europea supone el 19,5% del gasto militar mundial (The Military Balance 2002-2003).

[24] La información sobre la objeción fiscal (cómo se hace técnicamente, qué porcentaje de los presupuestos del Estado se destinan a Defensa, cómo contactar con la Asamblea de Objeción Fiscal, etc.) se encuentra en www.justiciaipau.org/siof.

[25] www.noalainvestigacionmilitar.org.

[26] Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, Associació d'Estudiants Progressistes (Catalunya), Aula de Paz y Desarrollo (Burgos), Bibliotecarios por la Paz (Madrid), Casa de la Paz

(Sevilla), CGT-CIEMAT (Madrid), CGT-Universidades, Ciutadella contra la Guerra, COA-MOC de Zaragoza, Colectivo Hypatia (Madrid), Colectivo No Violencia y Educación (Madrid), Colectivo Universidad y Compromiso Social (Sevilla), Comisión Mueve (Valencia), Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans, Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias, Coordinadora Uni per la Pau (Catalunya), ESF de Galicia, Barcelona, Girona y Lleida, Físics per al Desenvolupament (Barcelona), Fundació Solidaritat UB (Barcelona), Instituto Paz y Conflictos de Granada, ISF de A Coruña, Málaga, Valencia, Valladolid, Asturias y León, Movimiento Antiglobalización de León, Movimiento Ciudadano por la Paz de Soria, Oficina de Acción Solidaria Universidade da Coruña, Seminario Galego de Educación para la Paz (Santiago de Compostela), UNED No a la Guerra (Madrid).

[27] Por ejemplo, en España la mayoría del dinero de la investigación militar de 2004 se gastó en programas de desarrollo y fabricación de nuevas armas, como el avión de combate Eurofighter, el avión de transporte militar A400-M, los helicópteros de ataque Tigre, las fragatas F-100 o los carros de combate Leopard y Pizarro.

[28] Más de medio millón de científicos del mundo se dedican a la investigación militar. La inversión mundial en investigación militar del año 2003 ascendió a más de 70.000 millones de dólares, acaparando un tercio de los recursos que se dedicaron a la investigación en todo el planeta. En investigación con finalidades bélicas se destinan cinco veces más recursos que a la investigación para la salud. Entre los productos desarrollados por la investigación militar están las minas antipersona y las armas nucleares, químicas y biológicas.

[29] Entre el año 1995 y el 2004, los presupuestos de España para investigación militar casi se quintuplicaron (aumentaron un 475%). En los presupuestos generales del Estado para 2005 se destinaron 1.330 millones de euros a la investigación militar, que representa el 26,7% de todo el gasto de España en investigación, que supone casi tres veces más que los recursos dedicados a investigación científica básica (fuente principal de financiación de las universidades y el CSIC) y más de cinco veces más que los gastos en investigación sanitaria. Según un informe de la OCDE, España es el segundo país del mundo que más porcentaje del PIB dedica a investigación militar, detrás de Estados Unidos; y el segundo país que menos porcentaje del PIB destina a la investigación básica, superando sólo a México (Boletín de la Objeción Científica, núm. 7, marzo 2004).

[30] La cláusula de buen uso que propone la campaña es la siguiente: «Queda absolutamente prohibida la utilización, investigación y desarrollo, de manera directa o indirecta, de cualquiera de las aportaciones científicas propias del autor que se presentan en esta memoria, por parte de cualquier ejército del mundo o por parte de cualquier grupo armado, para cualquier uso militar y para cualquier otro uso que atente contra los derechos humanos o contra el medio ambiente, si no es con el permiso escrito de todas las personas del mundo».

[31] Algunos de los más conocidos son Santiago Dexeus, Eudald Carbonell, Angel Pellicer, Carles Solá y Federico Mayor Zaragoza. Fundació per la Pau, nota de prensa, 18 febrero 2004; Boletín de la Objeción Científica, núm. 7, marzo 2004.

[32] Universidades de Valladolid, Oviedo, Alicante, Girona, Autónoma de Barcelona, Politécnica de Catalunya, Granada, Autónoma de Madrid, Santiago de Compostela, Barcelona, Lleida y Rovira i Virgili. Boletín de la Objeción Científica, núm. 5, julio de 2003.

[33] Universidades de Valencia, Ramon Llull y Pompeu Fabra.

[34] Boletín de la Objeción Científica, núm. 8, julio de 2004; Fundació per la Pau, nota de prensa, 5 julio de 2004.

[35] Campaña «Por la paz: no a la investigación militar!», nota de prensa, 10 noviembre de 2004.

[36] Materiales de Trabajo, núm. 24, abril de 2004.

[37] En 2004, la facturación en el sector aeronáutico se concentraba entre Madrid (60%), País Vasco (15%), Andalucía (15%) y Cataluña (5%).

[38] Pere Ortega, «La industria militar aeronáutica aterriza a Catalunya», Illacrua, núm. 124, noviembre

de 2004, pp. 14-16.

[39] El País, 5 diciembre de 2004.

[40] Pere Ortega, «El 11-M y Unión Española de Explosivos», Materiales de Trabajo, núm. 24, abril 2004.

[41] En España, unas 14.000 personas trabajan en industrias de armamentos.

[42] Por ejemplo, se estima que en el período de 2004 a 2013 se fabricarán en el mundo 4.300 aviones caza de combate. Materiales Trabajo, núm. 24, abril de 2004.

[43] Justícia i Pau forma parte de ENAAT.

[44] Para informarse sobre esta campaña se puede visitar www.armessotacontrol.org y www.controlarms.org/ es.

[45] En la actualidad, más de 80 países reciben armas españolas.

[46] Centre d'Estudis per la Pau J.M. Delás (Justícia i Pau), «Globalització i pau: per una defensa europea no armada», Quaderns per a la solidaritat, núm. 19, mayo de 2004.

[47] Estos grupos de combate estarán formados por militares de 20 de los 25 países de la Unión Europea. Algunos son grupos nacionales (España, Francia, Italia y Reino Unido) y otros son grupos mixtos (en el Eurocuerpo están integrados militares de Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo y España; la Fuerza Anfibia está formada por Italia, España, Grecia y Portugal; la Brigada franco-alemana, etc.). Estos grupos estarán operativos a partir de 2007-2008, en un calendario escalonado que debe empezar en 2005. A estos grupos se les dotará de suficientes medios de transporte, en particular de transporte aéreo de largo alcance, que es una de las carencias actuales.

[48] El País, 20 noviembre, 23 noviembre y 3 diciembre de 2004.

[49] El País, 20 diciembre de 2004.

[50] Naciones Unidas calcula que hay unos 26 millones de militares profesionales en el mundo.

[51] A 13 de diciembre de 2004, había 1.050 extranjeros profesionales en las Fuerzas Armadas españolas, la mayoría de ellos latinoamericanos. El País, 28 diciembre 2004.

[52] Tomás Gisbert, «La caída de efectivos del ejército profesional», Materiales de Trabajo, núm. 24, abril de 2004.

[53] El gobierno aprobó el 3 de diciembre de 2004 un real decreto que elevó el porcentaje máximo de extranjeros del 2% al 7% de los efectivos de tropa, tomando como referencia una plantilla de 102.000 soldados y marineros (el tope fijado en el decreto de 2002 era de 2.040 extranjeros y el nuevo lo sitúa en 7.140). El País, 18 diciembre de 2004.

[54] El País, 29 diciembre de 2004.

[55] El País, 17 y 19 febrero de 2005.

[56] Hasta ahora, unos 250 centros de enseñanza de Cataluña se han declarado objetores de conciencia a los planes de militarización de la enseñanza. Campañas similares a esta se han desarrollado en Madrid, País Valenciá, Canarias, Aragón, Castilla-León, Andalucía y País Vasco. La información sobre esta campaña se encuentra en www.fundacioperlapau.org.

[57] Enric Prat, «La violencia contra las mujeres en los ejércitos», mientras tanto, núm. 85, invierno 2002, pp. 10-13.

[58] Los casos de maltratos son frecuentes en todos los ejércitos del mundo. Dos ejemplos recientes: un capitán y veinte oficiales del ejército alemán torturaron (les aplicaron electrochoques, les taparon la nariz mientras les vertían agua en la boca, les taparon las cabezas con bolsas...) en junio de 2004 a ochenta soldados durante la instrucción en el cuartel de Coesteld (El País, 25 noviembre 2004); en el ejército británico se descubrieron 173 casos de racismo, violación, palizas, humillaciones y favores sexuales a cambio de una vida más tranquila en el centro instructor del cuartel del Ejército en Deepcut —ochenta de ellos se produjeron en 1995 y el resto en los años 2001 y 2002— (El País, 1 diciembre de 2004).